

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

| | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 184/73974 a 184/73979 | 13/05/2015 | 193949 a 193954 |
| 184/73981 y 184/73982 | 13/05/2015 | 193956 y 193957 |
| 184/73984 y 184/73985 | 13/05/2015 | 193959 y 193960 |
| 184/73988 y 184/73989 | 13/05/2015 | 193963 y 193964 |
| 184/73993 a 184/73997 | 13/05/2015 | 193968 a 193972 |

AUTOR/A: SEARA SOBRADO, Laura Carmen (GS)

RESPUESTA:

En relación con las preguntas de Su Señoría sobre discapacidad se señala que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su artículo 3 los principios que informan la ley, siendo el primero de ellos (letra a) “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”.

Es tal la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, que se le dedica el capítulo III del Título Preliminar (artículo 6), donde se afirma el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad, como pieza fundamental para el ejercicio de sus derechos.

Este artículo 6 informa todos los derechos que se regulan en el texto refundido (como es el derecho a la protección de la salud) y conlleva la libertad en la toma de decisiones y consecuentemente la obligación de adoptar medidas de accesibilidad tanto en la información a las personas con discapacidad, como para la toma de decisiones, mediante los apoyos pertinentes.

La aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social refuerza la protección de los derechos de las personas con discapacidad en lo relativo a su participación a través de sus organizaciones representativas, incluyendo explícitamente a los niños y las niñas y sus familias.

En la actualidad, las personas con discapacidad participan en el proceso de elaboración normativa en todas sus fases, desde la formulación de propuestas hasta la emisión de dictámenes e informes sobre aquellos proyectos normativos que versen sobre las materias que les afectan, a través del Consejo Nacional de la Discapacidad.

En 2013, se creó la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma del Tercer Sector, con el objetivo compartido de impulsar el reconocimiento del Tercer Sector de Acción Social como actor clave en la



defensa de los derechos sociales, y lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones, con las siguientes funciones:

a) Garantizar y fortalecer la interlocución del Tercer Sector del ámbito social en el diseño y aplicación de las políticas públicas de inclusión social que sean competencia de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

b) Conocer y debatir las iniciativas de la Plataforma de Tercer Sector relativas a las siguientes materias, que sean competencia de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad:

1. Medidas o actuaciones que afecten directamente a grupos de población en riesgo de pobreza y exclusión social o situación de vulnerabilidad social.
2. Medidas legislativas sobre el Tercer Sector del ámbito social.
3. Planes o programas de acción para el apoyo o impulso del tercer sector del ámbito social, tanto a nivel nacional como internacional.
4. Sistema de financiación del tercer sector del ámbito social.

c) Ser informada con antelación suficiente cuando sea posible, sobre aquellos proyectos normativos o iniciativas de contenido social promovidos por la Administración General del Estado y en particular por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que afecten directamente a grupos de población en riesgo de pobreza y exclusión social o situación de vulnerabilidad social.

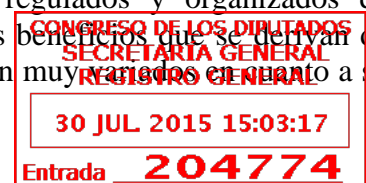
Además, las personas con discapacidad participan en la promoción, asesoramiento, apoyo y seguimiento de las políticas públicas a través de diversos organismos dependientes de distintos Departamentos como la Comisión de seguimiento de las lenguas de signos españolas y medios de apoyo a la comunicación oral, el Foro de Cultura Inclusiva, el Foro de Justicia y Discapacidad y otros.

En la actualidad, se encuentra en trámite parlamentario el proyecto de la Ley del Tercer Sector de Acción social. El objeto de este proyecto normativo es reforzar la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante la Administración General del Estado, para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social mediante la regulación común del conjunto de entidades que lo integran.

La Ley garantiza la participación real y efectiva de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en los procedimientos de elaboración, desarrollo, ejecución, seguimiento y revisión de normas y políticas sociales, en el ámbito de la Administración del Estado, a través del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

Regula, asimismo, un mecanismo permanente de interlocución entre la Administración General del Estado, en concreto entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, representadas a través de la Plataforma del Tercer Sector, en relación con las políticas públicas en materia social que son de su competencia.

En relación con los documentos acreditativos de las situaciones de discapacidad, en cada Estado Miembro constituyen una actividad administrativa o están regulados y organizados de diferentes formas, incluso siendo inexistentes en muchos de ellos, y los beneficios que se derivan de ésta están restringidos con carácter general a los residentes y son también muy variados en cuanto a su





extensión y requisitos de aplicación, en los últimos tres años se ha impulsado la participación en el denominado proyecto “InclEUusive Card”.

Durante 2013, se participó por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el grupo de trabajo creado por la Comisión Europea para este proyecto, en el que se han explorado las posibilidades para el establecimiento de una tarjeta europea de discapacidad que permita que las personas con discapacidad se puedan beneficiar de descuentos o ventajas (que ya existan en los países miembros) que se acojan a la misma, que funcione sobre la base de la reciprocidad, y que se refieran exclusivamente a áreas como transporte, ocio, cultura, deportes, etc.

Se solicitó la colaboración de las Comunidades Autónomas, ya que son las competentes en esta materia en sus territorios, para recopilar la información sobre sus tarjetas o documentos acreditativos existentes, los beneficios a los que da derecho en sus territorios respectivos y requisitos adicionales cuando existen, etc. También para que aportaran su interés, ideas y sugerencias sobre este proyecto todavía por concretar, habiendo manifestado muchas de ellas su interés en la iniciativa, así como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que también manifestó su opinión favorable. Toda la información aportada por las Comunidades Autónomas se compiló y aportó al grupo de trabajo.

El proyecto se planteó en el Parlamento Europeo, suscitando gran interés, y recientemente en la Conferencia de Discapacidad celebrada por la presidencia Letona en Riga el pasado 11 y 12 de mayo se ha vuelto a reiterar este proyecto.

Por otra parte, las actuaciones del Gobierno respecto al colectivo de personas con discapacidad se refieren al impulso de las políticas dirigidas a facilitar su integración en el mercado de trabajo.

El nuevo marco de estas políticas activas de empleo para las personas con discapacidad se acometerá dentro del desarrollo de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo, aprobada por Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre.

La Estrategia supone la articulación de un nuevo modelo, acorde con las competencias de las Comunidades Autónomas y en el marco de la Unidad de Mercado, de financiación, ejecución, control y evaluación orientado hacia la consecución de determinados objetivos, siguiendo directrices y ejes prioritarios de actuación. Entre estos ejes prioritarios se incluye el de realizar programas que apoyen la inserción en el mercado de trabajo de colectivos con especiales dificultades, entre ellos el de las personas con discapacidad (Eje 3).

En este marco, se prevé la elaboración de tres nuevos Reglamentos: Reglamento de Servicios, Reglamento de Empleo y Reglamento de Formación Profesional para el Empleo.

El Reglamento de Empleo establecerá la regulación que dará soporte a los distintos programas que puedan ejecutar las Comunidades Autónomas en materia de fomento del empleo, regulando los aspectos esenciales de los ‘programas comunes’, que podrán ser aplicados, y en, su caso, desarrollados en sus aspectos no esenciales, por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo.

Como se recoge en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, en todo caso, este desarrollo reglamentario incluirá un marco normativo de programas estatales de Políticas Activas de Empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que establecerá los contenidos mínimos que serán de aplicación en el conjunto del Estado; en este nuevo marco se pueden contener nuevas medidas, o modificaciones de las actuales,



todo ello obviamente con el objetivo de favorecer la inserción laboral y el mantenimiento en el empleo del colectivo de personas con discapacidad.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar las siguientes actuaciones puntuales que se han adoptado en relación con las personas con discapacidad:

- En el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, se ha recogido en su disposición adicional segunda las peculiaridades de los contratos para la formación y el aprendizaje concertados con personas con discapacidad, estableciendo, entre otras cuestiones para favorecer su utilización por este colectivo, la extensión de la duración de estos contratos hasta cuatro años y la posibilidad de que cuando el trabajador contratado sea una persona con discapacidad intelectual hasta un 25% del tiempo de trabajo efectivo podrá dedicarse a la realización de procedimientos de rehabilitación, habilitación o de ajuste personal o social.

- En el Acuerdo Marco con Agencias de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción laboral de personas desempleadas se ha recogido entre las cantidades que pueden abonar los Servicios Públicos de Empleo a las Agencias de Colocación que resulten adjudicatarias de las contrataciones derivadas del Acuerdo Marco un incentivo específico por la condición de persona con discapacidad de la persona cuya inserción se le hubiera encomendado.

El Gobierno tiene el firme compromiso de en la puesta en marcha de medidas dirigidas a favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

En este sentido, y como resultado de dichas medidas, es preciso señalar que la contratación general de personas con discapacidad aumentó en España en 2014 un 19,14%, siendo éste el mejor dato desde el año 2007.

Entre las medidas ya adoptadas en materia de inserción laboral de personas con discapacidad, además de las anteriores. Conviene, asimismo, destacar las siguientes:

Recuperación de medidas estatales de fomento del empleo de personas con discapacidad: la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral recupera la plena vigencia de la normativa estatal reguladora de las medidas estatales de fomento de empleo para personas con discapacidad frente a lo que preveían las normas aprobadas en la Legislatura pasada (disposición final duodécima). Esta normativa estatal reguladora de las medidas de fomento de empleo para personas con discapacidad había sido derogada por el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, retrasando dicha derogación al momento de la entrada en vigor de la Estrategia Española de Empleo.

Con la citada Ley 3/2012, de 6 de julio, se recupera plenamente la vigencia de las medidas estatales de fomento de empleo para personas con discapacidad. Las asociaciones de personas con discapacidad expresaron su apoyo a esta decisión.

Además en dicha norma, se incluyen criterios de priorización de permanencia en el empleo en caso de despido en empresas, para las personas con discapacidad.

Asimismo, se ha aprobado el Convenio Especial de Seguridad Social para trabajadores con discapacidad: (Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción del convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral), que garantiza a los trabajadores con especiales dificultades de inserción laboral que puedan cotizar por sí



mismos al sistema y generar derecho a prestaciones que de otra manera no conseguirían. La medida beneficia a más de 34.000 personas.

Además, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, contiene medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad. Los jóvenes con discapacidad tienen una posición reforzada en el nuevo marco de ayudas y apoyos públicos que a partir de ahora se habilitan para promover la contratación y el emprendimiento entre este grupo social. En el caso de los jóvenes con discapacidad se ha fijado la edad límite en los 35 años para beneficiarse de estas ayudas, frente a los 30 años establecidos con carácter general.

Hay que destacar también la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, con un presupuesto de 3.500 millones de euros y 100 medidas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ya sea a través de la contratación o del emprendimiento. En relación a la contratación, aunque todas las medidas estén dirigidas a jóvenes menores de 30 años, en el caso de aquellos que presenten una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, el tramo de edad se amplía cinco años más. También se ha contemplado que el límite máximo de edad para la celebración de contratos para la formación y el aprendizaje no sea de aplicación para las personas con discapacidad.

El compromiso del Gobierno con las personas con discapacidad ha llevado a adoptar importantes medidas a lo largo de estos años que tienen como denominador común dos objetivos principales: potenciar la inserción y el desarrollo laboral de las personas con discapacidad y reforzar la protección de estas personas en el ejercicio de sus derechos básicos.

Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha conseguido mejorar la regulación normativa, en línea con la Convención ONU de los derechos de las personas con discapacidad, se dispone de un Plan de Acción para los próximos años, se ha avanzado en la inserción laboral de las personas con discapacidad, se ha actuado en el sostenimiento económico de las entidades, en la protección de los derechos, en medidas de acción positiva para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y en el apoyo de las entidades sociales.

Desde el IMSERSO se ha adoptado la medida de certificar el tipo o los tipos de deficiencia o deficiencias que determinan el grado de discapacidad reconocida, conforme a la información que conste en el expediente, solo a instancia de la persona interesada o de quien ostente su representación. Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Se ha promovido la sensibilización de la sociedad en todo lo referente a la discapacidad con la actualización permanente de espacio habilitado en la web del Instituto: “Autonomía personal y Dependencia” para la difusión de contenidos y orientación de trámites relativos al reconocimiento del grado de discapacidad y las prestaciones y servicios, e información estadística y documental sobre la discapacidad.

Además, se ha incorporado la asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de las personas con discapacidad y sus familias, CERMI, en el órgano colegiado de participación de la Administración General del Estado que garantiza la uniformidad en los criterios de aplicación de los baremos de discapacidad en todo el territorio del Estado: Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la valoración del Grado de Discapacidad, y a los grupos de trabajo creados para la elaboración de adecuación de los baremos a la Clasificación Internacional del



Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud que está acometiendo por mandato de Proposición no de ley aprobada por la comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.

En el ámbito de la sensibilización y capacitación con profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, se ha impartido por el IMSERSO Formación Especializada para los profesionales de los equipos de valoración de la discapacidad de las Comunidades Autónomas y propios del IMSERSO, sobre Enfermedades raras y criterios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud (CIF/ OMS-2001).

Con objeto de facilitar la labor de las oficinas de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal en la elaboración del itinerario individual y personalizado de empleo se ha promovido desde el IMSERSO que los equipos de valoración de la discapacidad evalúen, en la valoración del grado de discapacidad, las capacidades o aptitudes que tenga la persona, a efectos de su inclusión social y laboral, en informe normalizado. Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado.

El IMSERSO también ha actualizado su base estatal de datos de personas con discapacidad, difundiendo anualmente informe con indicadores del perfil de discapacidad en España. Igualmente ha contribuido con la aportación de dicha información al estudio anual del “Empleo de las personas con discapacidad” que elabora el INE mediante un convenio de colaboración con dicho Instituto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y representantes de las personas con discapacidad CERMI y ONCE.

Además, el IMSERSO ha avanzado en los siguientes objetivos:

- Gestión y homogenización de las pensiones de invalidez de naturaleza no contributiva de la Seguridad Social.
- Gestión y homogenización de los subsidios económicos y sociales de la Ley General de derechos para las personas con discapacidad.
- Impartición de cursos formativos cofinanciados con el Fondo Social Europeo impartidos en los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física y Centros Base de Ceuta y de Melilla
- Mantenimiento de la atención en los centros de atención a las personas con discapacidad física.
- Conciertos de plazas para personas con discapacidad en las localidades de Ceuta y de Melilla.
- Mantenimiento de las convocatorias anuales de subvenciones para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad.
- Mantenimiento de las convocatorias de subvenciones para personas con discapacidad física y jurídica con residencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla.



- Próxima apertura del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con trastorno mental grave en la ciudad de Valencia.

La medida más importante en materia de igualdad jurídica ha sido la aprobación, en la reunión del Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014, del Plan de Acción 2014-2016 de la Estrategia Española de Discapacidad, dotado con más de 3.093 millones de euros. Este Plan está orientado hacia la eliminación de las causas de discriminación, al partir de la idea de que la igualdad de derechos de todas las personas ha de ser el referente para cualquier medida que pretenda actuar sobre las condiciones de exclusión en las que frecuentemente se encuentran las personas con discapacidad.

Los principios de igualdad de oportunidades y de igualdad entre mujeres y hombres forman parte esencial del Plan, favoreciendo la perspectiva de género y discapacidad, de tal forma que las mujeres con discapacidad, objeto frecuente de doble discriminación, se encuentran expresamente contempladas.

Por este mismo principio de igualdad de oportunidades, se tienen en cuenta en el Plan a los niños y niñas con discapacidad, grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión, violencia y pobreza y en el que la Convención de la ONU fija especial interés.

También presta especial atención a las personas con discapacidad que viven en zonas rurales y a las personas mayores con discapacidad, que conforman un colectivo cada vez más numeroso, a quienes beneficiarán las acciones del Plan que repercuten en el fomento de un envejecimiento activo.

El Plan está estructurado en cinco ejes o áreas: igualdad para todas las personas, empleo, educación, accesibilidad, dinamización de la economía. Estos ejes se desarrollan luego a través de objetivos operativos y de actuaciones concretas.

La concesión de la nacionalidad española por residencia corresponde al Ministerio de Justicia, previa tramitación de un expediente al efecto, tal y como se regula en el artículo 22.4 del Código Civil.

Con el fin de que las personas con discapacidad que acceden a la prueba para dicha concesión no sean discriminadas por razón de su discapacidad, se les debe facilitar las adaptaciones necesarias, de modo que se garantice el goce o ejercicio pleno de sus derechos, en igualdad de condiciones.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social reconoce en su artículo 7 que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento jurídico y obliga a las administraciones públicas a proteger de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables a la discriminación múltiple como son, entre otras, las personas con discapacidad integrantes de minorías. Además para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones públicas han de promover las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señala en su artículo 37 que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través del empleo ordinario, empleo protegido y empleo autónomo. Y con el fin de aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de éstas, las Administraciones Pública han de



fomentar sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promover los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

Dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, se señala que en el Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se modifica la prestación del consentimiento informado en los supuestos en los que el paciente al que se le presta asistencia médica es una persona con la capacidad modificada judicialmente.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la Autonomía del Paciente es reformada en la disposición final segunda para añadir al artículo 9 un apartado 6 en el que se establece que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho al paciente, la decisión debe adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente, y en caso contrario deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente.

El Gobierno, y en particular el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, señala que en la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que ha sido aprobada recientemente, se modifica la regulación referida a la oferta pública de empleo en el ámbito del personal al servicio de la Administración de Justicia, de tal forma que el cupo reservado para ser cubierto entre personas con discapacidad se eleva al 7% de las vacantes. Se iguala así el porcentaje con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otra parte, por lo que se refiere al ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras Judicial y Fiscal se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos y, una vez superados dichos procesos, a las adaptaciones y ajustes razonables en los puestos de trabajo y en los entornos laborales de los Centros a las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo. Estas medidas suponen un avance en la adopción de medidas que favorezcan la total integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad

Para adaptar nuestra legislación al espíritu y a la terminología de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se precisa modificar la legislación sustantiva y procesal a fin de garantizar que las personas que no están en condiciones de gestionar por sí solas sus intereses cuenten con los apoyos y complementos a su capacidad estrictamente necesarios para su protección, y para que estos apoyos cumplan los requisitos de proporcionalidad y adecuación al fin perseguido. Igualmente, se insiste en garantizar el respeto a los derechos de la personalidad de las personas con discapacidad y, en particular, en que las medidas de apoyo y protección establecidas en su beneficio se articulen tomando en consideración sus deseos y preferencias. Esta reforma se orienta a intervenir lo menos posible en la esfera personal y patrimonial de la persona necesitada de una institución de protección y apoyo determinada judicialmente, de forma que ésta complemente su capacidad de obrar en función de sus circunstancias concretas.

Por ello, las reformas sobre las que se está trabajando afectan al Código Civil para regular, entre otros aspectos, las instituciones de protección y apoyo y los supuestos en los que se precisa su constitución; las voluntades anticipadas; los requisitos para el ejercicio de actos jurídicos patrimoniales; o la responsabilidad civil de las personas con discapacidad necesitada de una institución de protección y apoyo.

También se proyecta modificar los procesos judiciales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil de determinación de las instituciones de protección y apoyo para la toma libre de decisiones de



las personas con discapacidad que las precisen, así como el correspondiente a los ingresos no voluntarios o a la esterilización.

Igualmente se modifican los aspectos que se consideran necesarios que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales de dichas personas, entre otros, el derecho al voto, o a ser miembro de un Tribunal del Jurado.

En su elaboración se respeta el derecho civil propio de las Comunidades Autónomas que lo desarrollen en la medida que dicho desarrollo resulte acorde con la citada Convención.

No obstante lo anterior, ya se ha procedido a introducir en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la reforma de las causas que impiden ser testigos en los otorgamientos de los testamentos, suprimiendo la exclusión existente de los ciegos y totalmente sordos y mudos.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006 ha obligado a reformar el Ordenamiento español en todos sus campos. Esa reforma se inició con la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que modificó más de una decena de leyes, y se desarrolló a través del Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, que a su vez modifica los reglamentos de desarrollo de las leyes anteriores y, además, el Reglamento de Organización y Régimen del Notariado. Cuatro años después, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modificó con el mismo fin el Código Penal. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, dedica tres capítulos del Título II a la discapacidad: el capítulo VI, que lleva como epígrafe “De la protección del patrimonio de las personas con discapacidad”, el capítulo VII “Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente” y el capítulo VIII, “De la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente”. Queda únicamente por adaptar el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cumplimiento de la disposición adicional séptima, relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones. El Ministerio de Justicia está trabajando actualmente en la referida adaptación.

Madrid, 15 de julio de 2015